



Colombia en estado de sitio

CON demasiada frecuencia, los medios informativos se hacen eco de acontecimientos de carácter negativo que tienen como epicentro Colombia. No se trata de casos sueltos, sino que forman una cadena de hechos que han cristalizado en un estado de sitio. El autor de este estudio pormenoriza los componentes de esta situación insostenible. También analiza las causas de esta violencia continuada que constituye una guerra civil: desigualdades sociales, oposición política, violación de derechos humanos, delincuencia común, milicias populares de defensa. En medio de este caos, destaca el papel humanitario de la Iglesia y de organismos internacionales.

Martin Maier*

EL Premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, en su último libro, *Noticia de un secuestro*, comparaba la

* Doctor en Teología. Redactor de la revista *Stimmen der Zeit*. München.

situación de Colombia con el fuego de la zarza del antiguo testamento en el que el país se va consumiendo en los últimos 20 años. El mago del realismo volvía así a la realidad de Colombia de 1991. La guerra del rey de las drogas Pablo Escobar contra el Estado de Colombia alcanzó entonces su punto culminante. Escobar mantenía un ejército privado de 3.000 sicarios, como se designa en Colombia a los asesinos de oficio. Por cada policía asesinado había establecido una recompensa de 1.000 dólares. Con el secuestro de diez periodistas muy conocidos en todo el país, intentó evitar ser extraditado a Estados Unidos. Amenazó además con convertir en cenizas el centro histórico de la artística ciudad de Cartagena.

García Márquez describe, con estilo de reportaje, el secuestro, los torturantes meses de los rehenes en su escondite, el asesinato de dos de ellos, las complicadas negociaciones que condujeron finalmente a la liberación de los restantes rehenes y al encarcelamiento de Pablo Escobar en una cárcel de lujo, proyectada por él mismo. Pero la historia no termina con el libro. Un año más tarde, ante una estupefacta concurrencia nacional e internacional, abandonó Escobar su prisión, y volvió al submundo de sus negocios. Con la ayuda de especialistas norteamericanos el estado colombiano, con un comando de tropas especiales «bloque de búsqueda» preparado al efecto, organizó la nada ejemplar «caza de Escobar»... Por fin fue descubierto el 2 de diciembre de 1993 por una conversación telefónica en Medellín con su hijo y tiroteado cuando intentaba huir por los tejados de una casa. Con la muerte de Escobar el cartel de drogas de Medellín quedó seriamente dañado. También el cartel de Cali perdió a sus dirigentes con el encarcelamiento de los hermanos Rodríguez Orejuela en 1995. Sin embargo, el problema de las drogas en Colombia no ha quedado aún resuelto con la desaparición de los dos carteles. Las estructuras del tráfico únicamente han sido descentralizadas. Los dineros provenientes del tráfico de drogas siguen jugando en el estado y en la sociedad de Colombia un papel verdaderamente corrosivo.

Colombia produce hoy más de la mitad de la cocaína del mercado mundial. Últimamente este país participa también de manera importante en la producción de heroína y marihuana. Se calcula que alrededor de 250.000 personas, es decir, el 3% de la población activa, trabajan en la «economía de la droga». Cada año del tráfico de drogas se vendrán a obtener unos 6.000 millones de dólares¹. Este dinero se blanquea en la misma Colombia y la mafia de la droga lo invierte en inmobiliarias, en la agricultura y la ganadería. El peatón que pasea por las

(1) Cfr. K. Ambos. «Drogenhandel in Kolumbien» en *Kolumbien heute. Politik, Wirtschaft, Kultur*, ed.: v. W. Altmann, Th. Fischer, K. Zimmermann, Frankfurt, 1997, 331-353.

calles de Bogotá se siente aplastado por los enormes rascacielos. A primera vista la mayoría de ellos están deshabitados y no son utilizados.

Agravamiento de la guerra civil

AUN cuando la guerra de las drogas toca a su fin, quedan otras muchas guerras que desgarran y sacuden el país: la guerra política entre el ejército y diversos movimientos de la guerrilla, la «guerra sucia» que los grupos paramilitares de extrema derecha llevan a cabo, con torturas y muertes, contra sus adversarios políticos, la «guerra de depuración» de los escuadrones de la muerte en los suburbios de las grandes ciudades.

Hace ya más de 30 años, y en la última época con dureza creciente, arde la guerra civil entre la guerrilla de la izquierda y el ejército. Los dos grandes grupos de la guerrilla son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se calcula en unos 10.000 el número de guerrilleros. Controlan regiones enteras de las que se han retirado las fuerzas regulares. De aquellas reivindicaciones sociales y de las ideas políticas revolucionarias con las cuales la guerrilla en la década de los sesenta justificaba el comienzo de sus operaciones en los suburbios de las grandes ciudades, apenas queda nada. Al igual que el ejército y los grupos paramilitares, tampoco la guerrilla se detiene ante el terror que se produce en la población civil. Una cuarta parte de los asesinatos políticos en 1996 hay que cargarlos en la cuenta de la guerrilla.

Los insurrectos se procuran el dinero para su actividad guerrillera ante todo por medio de secuestros y extorsiones. Son responsables del 39% de más de los 3.000 secuestros que se producen cada año. Aparte de esto se financian con impuestos revolucionarios por la «protección» en el negocio de las drogas y por impuestos que recaudan de los grandes propietarios y empresarios. La hipoteca más pesada que a la larga grava sobre el país son las minas que colocan en una gran cantidad. Los atentados contra los oleoductos tienen fatales consecuencias ecológicas.

Como actores nuevos en la guerra civil han entrado desde hace algunos años los grupos paramilitares. Están formados por antiguos miembros del ejército, por asesinos a sueldo provenientes de la guerra de la droga, que han quedado en paro y por algunos guerrilleros. La mayor parte de las veces los jefes son grandes terratenientes. A comienzos de 1997 se unieron en una organización de protección, llamada *Movimiento Nacional de Autodefensas*, cuyo comandante es el lamentablemente famoso Carlos Castaño, dueño de

un millón de hectáreas de tierra. Hay varias órdenes de captura contra él. El 2 de junio de 1997 apareció en el semanario *Newsweek* una entrevista con él, en la que admitía que en la lucha contra la guerrilla sus tropas vulneraban los derechos humanos. Justificaba este hecho con la razón de que se ven obligados a llevar una guerra irregular.

Desde hace meses hay una discusión muy viva sobre las milicias civiles «Convivir». Estas milicias tienen licencia de armas y su cometido es el de apoyar a la policía y al ejército con servicios de información en la lucha contra los insurrectos. Los partidarios afirman que el número de secuestros y otros delitos ha disminuido gracias a la presencia de Convivir. Los que se oponen a Convivir afirman que la población civil queda implicada en la guerra civil. En julio de 1997 se calculaba que habría unos 700 grupos de Convivir con unos 100.000 miembros. El 7 de noviembre de 1997 el Tribunal Constitucional de Colombia por 5 votos frente a 4 se inclinó a favor de la legalidad de Convivir aunque determinó que, a excepción de los fusiles, no podrían llevar ningún otro tipo de armas pesadas.

La población civil como víctima de la guerra

LA guerra civil se ha ido extendiendo a varios frentes, con lo cual el ejército y los grupos paramilitares forman una alianza tácita. La población civil queda aplastada entre esos dos frentes. Las matanzas de campesinos a manos de las milicias paramilitares han aumentado dramáticamente en 1997. Se les suele reprochar a los campesinos su apoyo a la guerrilla. A su vez la guerrilla suele someter a juicio sumarísimo a los sospechosos de apoyar al ejército o a los paramilitares. En el norte del país, en zonas donde la guerrilla tiene una presencia masiva, se ha llegado a deportaciones masivas de la población civil. En total se calcula en un millón el número de deportados dentro del propio país. Con ello Colombia tiene que hacer frente además a un enorme problema de refugiados.

En unas jornadas sobre «Desarrollo y paz» celebradas en Bogotá el 6 de noviembre de 1997 se produjo una escena verdaderamente simbólica. El general Manuel Tapias, segundo comandante en jefe del ejército, intentó presentar, con el apoyo de medios técnicos modernos, las realizaciones sociales del ejército. En la discusión que siguió a continuación, se levantó una campesina de la región en guerra de Urabá y de forma muy gráfica expresó cómo la población civil se ha convertido en una especie de pelota con la que

juegan los grupos que están en guerra. Es atacada por todas partes. Habló de sus hijos e hizo una apelación a la humanidad en general. Parecía como si David y Goliat estuviesen frente a frente. El ejército no tiene ni la potencia militar ni el deseo de terminar la guerra. Para los cabecillas y dirigentes la guerra es un negocio lucrativo y por ello no tienen interés especial en que se termine.

Desde hace 12 años, diversos gobiernos han intentado alcanzar una solución a través de negociaciones. Después de trabajosos encuentros se ha llegado a la integración de algunas pequeñas fracciones de la guerrilla en la vida civil. La mayor de ellas fue el *Movimiento 19 de abril (19M)* que se transformó en partido político y alcanzó algunos éxitos electorales provisionales. También el presidente Ernesto Samper inició su mandato en junio de 1994 con el propósito de alcanzar un acuerdo para acabar con la guerra civil. El 31 de enero de 1995 por primera vez reconoció la responsabilidad del estado en una matanza concreta, cometida en Trujillo, en el Departamento de Valle, en marzo de 1990, por un comandante y unos soldados junto con algunos grupos paramilitares. Quedaba así patente de manera oficial que el ejército y grupos paramilitares realizan en común algunas acciones que vulneran los derechos humanos. Mientras tanto hay que considerar como fracasado el plan de paz de Samper. La posición del gobierno quedó decisivamente debilitada por las acusaciones, nunca completamente descartadas, de que Samper financió su campaña electoral fundamentalmente con los fondos provenientes del Cartel Cali. El 11 de junio de 1996 el gobierno de Estados Unidos, basándose en estas acusaciones, denegó por decreto a Samper la entrada en el país. La guerrilla se aprovechó de estas acusaciones y rehusó al gobierno toda clase de legitimidad para poder negociar.

Tanto la guerrilla como los paramilitares intentaron boicotear, de forma violenta, las elecciones municipales de octubre de 1997. La guerrilla fundamentaba su actitud por la falta de justicia social y por ello a los candidatos que se presentaban a las elecciones los declaraba «objetivos militares». Los paramilitares justificaban su boicot electoral en las acusaciones, ya mencionadas, contra Samper y el empleo de dinero de la droga. A lo largo de la campaña electoral 110 políticos fueron asesinados y 244 candidatos secuestrados. En 153 municipios de un total de 1.071 los candidatos se retiraron de las elecciones, en 22 no se presentó ninguno y en 57 municipios no se celebraron elecciones².

El 31 de mayo han tenido lugar las elecciones presidenciales. A pocas semanas de las elecciones el balance presentaba unos rasgos negativos per-

(2) Cfr. H. A. Torres Rojas, «Apuntes sobre las elecciones» en *Utopías* 50 (1997).

sistentes. La inevitable movilización de una reforma agraria, prevista hace tiempo, fracasó en el Parlamento por la resistencia de los terratenientes. Del programa social de Samper ya poco quedaba desde que, a partir de 1996, la economía ha seguido un desarrollo peor del que se había esperado. Al final tampoco Samper ha conseguido volver a conquistar el monopolio estatal de la violencia sin el cual ningún gobierno puede restablecer en Colombia el orden y la seguridad de los ciudadanos.

El círculo diabólico de la violencia

DE las más de 31.000 víctimas anuales de la violencia, sólo un 14% hay que cargarlas a la guerra civil. La gran mayoría de las muertes violentas se producen en el contexto de la criminalidad general: muertes por robo, atracos a bancos, reyertas con armas de fuego y arma blanca en bares, guerra de bandas, etc. En 1985 se registraron 222.000 actos delictivos. De ellos, 31.446 asesinatos, 71.000 atracos y 1.170 secuestros³. Con una cifra de 77,5 por cada 100.000 habitantes, la tasa de asesinatos en Colombia es veinte veces más alta que en Alemania y con una cifra de 310 Medellín aparece como la ciudad más violenta del mundo. A ello hay que añadir que el sistema judicial está absolutamente rebasado y va de mal en peor. El 97% de los actos violentos delictivos se quedan sin esclarecer y sin condena.

En las barriadas pobres de las grandes ciudades hay bandas juveniles y criminales que llevan a cabo luchas locales. Como reacción a esta inseguridad generalizada se han formado algunas patrullas defensivas armadas que se autodenominan milicias populares. Las personas adineradas se parapetan detrás de estas estructuras de tipo bunker y mantienen toda una serie de ejércitos de escoltas privadas. Colombia ha caído como una presa en el círculo diabólico de la violencia. La violencia engendra violencia. Desde que el estado se ha mostrado incapaz de defender a sus ciudadanos éstos echan mano, cada vez más, de la autodefensa y la justicia por su propia cuenta. Se calcula que hay en circulación unos 6 millones de armas de fuego, de las cuales 5 millones son ilegales.

Una forma de violencia especialmente repulsiva son las llamadas «limpiezas sociales», que llevan a cabo los escuadrones de la muerte en las barria-

(3) Cfr. Comisión de Conciliación Nacional, *Hacia la estructuración de una política nacional permanente de paz*. Bogotá, 1997.

das pobres de las grandes ciudades. Los mendigos, los «niños de la calle», las prostitutas, los homosexuales, pequeños traficantes de drogas y ladrones son considerados «desechables» y asesinados especialmente por la noche. Grupos de defensa de los derechos humanos y la Iglesia católica han denunciado repetidas veces que en estos escuadrones de la muerte están implicados algunos miembros del cuerpo de policía. Sólo una mínima parte de esos asesinatos queda esclarecida por las fuerzas del orden.

Si nos preguntamos por las causas de la violencia, habrá que mencionar en primer lugar la injusticia social y la extrema desigualdad de la distribución de la tierra y la renta. Colombia no es un país pobre pero sí un país con demasiados pobres. El 40% de la población, es decir, 13 millones de personas viven en extrema pobreza. De acuerdo con estas cifras, la distribución de la riqueza es enormemente desigual: el 50% de la población dispone del 17% del PNB mientras que el 20% de los ricos detenta el 54,7%. El 10% más rico de la nación tiene unos ingresos 46 veces más elevados que el 10% de los más pobres. El 13% de la población es analfabeta. Sólo un 47% de los colombianos tienen acceso a una atención sanitaria regulada⁴.

Como en todos los países de Latinoamérica la injusticia se manifiesta sobre todo en el campo. Con 1.134 millones de kilómetros cuadrados, Colombia es el cuarto país más extenso de Suramérica y ocupa el segundo lugar de habitantes, después de Brasil, con una población de 37,4 millones. Una pequeña minoría de terratenientes disfruta de más del 60% de la tierra cultivable. Desde el punto de vista del desarrollo económico de los últimos años resulta paradójico el hecho de que relativamente hablando hay una gran estabilidad macroeconómica, el crecimiento ronda el 3,5% y se detecta una creciente mejora de los principales indicadores sociales. Pero al mismo tiempo ha aumentado el número de aquellas personas que carecen de lo necesario para sobrevivir. En los años 60 circulaba el siguiente dicho: «La economía va bien pero al país le va mal». Como en otros países de Latinoamérica la política económica neoliberal produce el siguiente efecto: cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres. De los presupuestos estatales el 30% va destinado al pago de la deuda externa, otro 30% para gastos de defensa y sólo queda un 40% para el resto de los capítulos del presupuesto.

Pero sería excesivamente simplificador situar las causas de la violencia únicamente en los factores sociales. La violencia tiene unas complicadas raíces, históricas y culturales. Desde la independencia de España, en 1819, Colombia viene siendo sacudida cíclicamente por unas revueltas, muy pare-

(4) Cifras tomadas de las publicaciones del *Programa por la paz*.

cidas a las guerras civiles, producidas por la oposición de los partidos liberales y conservadores. Hasta el momento actual se pueden enumerar hasta 19 las guerras civiles regionales y nacionales. De 1899 a 1901 la «guerra de los mil días» causó 100.000 muertes. Al final de esta guerra se produjo el desmembramiento de Panamá de Colombia, en 1903. El período más sangriento de este siglo, desde 1948 a 1958, en el que hubo 200.000 víctimas, ha sido denominado «la violencia». Una vez más la chispa que desató esta violencia fue el choque de los conservadores y los liberales, que quedó solucionado con la formación del llamado «Frente Nacional». Los dos partidos acordaron una especie de gran coalición en la que se establecía un turno rotatorio en la responsabilidad del gobierno del país.

Violación sistemática de los derechos humanos

EN un clima de violencia generalizada los derechos humanos son sistemáticamente violados por detenciones injustas, ejecuciones extralegales, asesinatos políticos, desapariciones y amenazas anónimas. De acuerdo con el informe anual de Amnistía Internacional de 1997, las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares causaron más de 1.000 muertes de personas civiles. Según los últimos informes de la comisión de juristas colombianos el 30% de las violaciones de derechos humanos hay que atribuirles a la guerrilla, el 10% al ejército y el resto a los grupos paramilitares. En comparación con años anteriores se ha producido un corrimiento desde el ejército a los grupos paramilitares.

La nueva ola de amenazas contra los defensores de los derechos humanos ha quedado documentada de forma exhaustiva por el *Washington Office on Latin America*⁵. Algunos sectores del gobierno y del ejército, con un juicio muy expeditivo, sitúan a los defensores de los derechos humanos al lado de la guerrilla. Así, el Jefe supremo del ejército, general José Manuel Bonett, en febrero de 1997 atacó públicamente al centro de investigación social de los jesuitas CINEP por su documentación sobre violaciones de los derechos humanos, con lo cual, en su opinión, se estaban causando daños no sólo al ejército sino a todo el país⁶.

(5) *Losing Ground: Human Rights Advocates under attack in Colombia*, Washington Office on Latin America, Octubre 1997.

(6) Cfr. *El espectador*, 27.2.97.9a

A estas amenazas verbales siguió, tres meses después, un sangriento atentado que significó un nuevo grado en la persecución de los defensores de los derechos humanos. En la madrugada del 19 de mayo de 1997, un grupo de 5 hombres armados y vestidos de negro irrumpió en el domicilio de Mario Calderón y Elsa Alvarado en el centro de Bogotá. Los dos eran, desde hacía años, colaboradores del CINEP. No sólo este matrimonio sino también Carlos Alvarado, padre de Elsa, fue asesinado por el comando; Elvira Alvarado, la madre de Elsa, fue herida gravemente aunque sobrevivió al atentado. Iván, de dos años de edad, hijo de Mario Calderón y Elsa Alvarado no fue descubierto y por ello no le pasó nada. Las investigaciones sobre este crimen apuntan a unos autores del círculo del ejército. Al día siguiente se organizó una manifestación de duelo de 5.000 personas en protesta por este crimen por las calles de Bogotá.

Esta demostración puso de manifiesto que las violaciones de los derechos humanos y los sufrimientos de la población civil por la guerra y la violencia han alcanzado un nivel insostenible. El estado no sólo se muestra incapaz de controlar la violencia sino que ha perdido el monopolio de la violencia. Los años pasados han puesto de manifiesto que no se puede esperar la terminación de la guerra de las actuaciones normales del parlamento, del gobierno, de los partidos y de las elecciones. Para hacer más difícil aún la situación, el estado está dominado por un bipartidismo tozudo y oligárquico y el clientelismo y la corrupción han llegado a límites estremecedores. Aunque la nueva Constitución de 1991 prevé claramente una amplia posibilidad de participación de los ciudadanos, poco se ha cambiado hasta ahora. Están surgiendo, en número creciente, iniciativas de la sociedad civil a favor de la paz y la reconciliación. También la comunidad internacional de estados se siente intranquila e interpelada por la situación dramática de Colombia.

Iniciativas por la paz de la sociedad civil

GRUPOS universitarios, organizaciones de derechos humanos, artistas y movimientos sociales pusieron en marcha en 1990 la Acción «Colombia viva». En 1995 el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia instituyó una «Comisión para la reconciliación nacional». Además del arzobispo de Bogotá y del secretario general de la conferencia episcopal forman parte de esta comisión cuatro ex ministros, conocidos periodistas y científicos. La principal finalidad de la comisión es elaborar una solución pactada del conflicto armado y trabajar por la reconciliación

nacional. La comisión realizó una encuesta entre las instituciones y personalidades más significativas de la sociedad colombiana para hacer un proyecto de una «política permanente de paz para Colombia». Para ello han tenido encuentros con representantes de la guerrilla y del gobierno. A partir de las respuestas a la encuesta se ha redactado un amplio documento en el que se proponen caminos concretos para la reconciliación y las negociaciones de paz.⁷ Para que este proceso pueda tener estabilidad duradera, parece necesaria la convocatoria de una Asamblea Permanente por la paz.

Bajo el amparo de UNICEF se emprendió por todo el país en 1996 una iniciativa para movilizar a los niños en favor de la paz. Por unos medios llenos de fantasía y de juegos educativos se transmitió a los niños el significado de la paz y de los derechos humanos. De allí salió un «Mandato de los niños para la paz» en el que 2,7 millones de niños dieron su voto en favor de la paz y para un derecho humano especial. Ese «mandato» de los niños se convirtió en el prototipo para la mayor movilización que ha habido hasta ahora a favor de la paz en el contexto de las elecciones municipales de 26 de octubre de 1997. Con una papeleta de voto especial en estas elecciones se podía también dar un voto a la paz. Allí se decía, con frases equivalentes a un compromiso: «*Me comprometo a construir la paz y la justicia social, proteger la vida y rechazar cualquier clase de violencia y aceptar el mandato de los niños en favor de la paz*». De allí surgió la apelación a los dirigentes de la guerra para que solucionaran el conflicto de forma pacífica y respetaran los derechos internacionales de los pueblos. En concreto se exige: no reclutar a ninguna persona menor de 18 años, no secuestrar ni hacer desaparecer a nadie, no atacar ni expulsar a la población civil ni implicarla en el conflicto armado.

El «mandato» por la paz ha recibido una sorprendente respuesta por parte de más de 10 millones de electores y electoras. Se ha expresado así un «masivo» no a la guerra y a la violencia. A primeros de noviembre se celebró un encuentro de los iniciadores de este «mandato» con el presidente Samper en el que éste aseguró que ningún menor de edad sería ya reclutado en el ejército. El cumplimiento de las exigencias restantes del mandato para la paz debe ser exigido también a los partidos en conflicto.

En las numerosas publicaciones y análisis para una superación pacifista de la guerra en Colombia siempre se subraya la necesidad de una mediación internacional. A ejemplo de las negociaciones de paz para la terminación de la guerra en El Salvador, esta mediación podría ser asumida por las Naciones Unidas en unión con un grupo de «países amigos». Un paso en esa dirección

(7) Ib. A.3.

es la creación, en mayo de 1997, de una Oficina del Alto Comisionariado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Fue precedida por largas discusiones y negociaciones. Esta oficina debe velar sobre todo por el conjunto de la situación de derechos humanos y ofrecer su asesoramiento al gobierno en cuestiones de derechos humanos. Directora de esta oficina es la española Almudena Mazarrasa quien se ha significado en los medios de comunicación social por las cuestiones de los derechos humanos. Con ella trabaja un grupo de expertos internacionales que recogen informes de todos los afectados por violaciones de los derechos humanos y los documentan de forma adecuada. La Oficina carece de mandato para realizar investigaciones o condenar a los culpables de violación de los derechos humanos.

No sólo dentro del país sino también en el extranjero hay personas que se movilizan en favor de Colombia. Así, desde el 29 de septiembre al 4 de octubre de 1997 tuvo lugar desde Berna hasta Luzerna una «marcha por la vida de Colombia», en la cual participaron 400 personas. Tenían como meta llamar la atención sobre la dramática situación de Colombia. En una declaración de 75 diputados suizos se le exigió al gobierno colombiano que respetase los derechos humanos y disolviera los grupos paramilitares. También en una declaración del parlamento europeo de 16 de octubre de 1996 se condenaron las violaciones de los derechos humanos y se exigieron negociaciones de paz para terminar con la guerra. Se le exigió a Samper que «tomara iniciativas serias para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos». El parlamento europeo también condenó el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado.

El nuevo papel de la Iglesia católica

EL papel de la Iglesia católica, a la cual pertenece el 95% de la población, como mediadora entre el gobierno y la guerrilla, va adquiriendo una importancia creciente. Históricamente, en las confrontaciones entre los librepensadores liberales y los católicos conservadores la propia Iglesia era un partido. Pero en la histórica Asamblea del Episcopado Latinoamericano en 1968, en Medellín (Colombia) se produjo un cambio de posición de la Iglesia a favor de los pobres y oprimidos. Cada vez más la opción preferencial por los pobres va siendo realizada por la iglesia colombiana en la pastoral con los negros, que constituyen el 4% de la población y con la población indígena, que es el 2%. Por razón de su com-

promiso por la paz y la reconciliación, la Iglesia es tomada cada vez más en serio como un factor político. El arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano, en relación con las acusaciones contra el presidente Samper por el dinero de la droga, expresó la siguiente metáfora realmente explosiva: a los desmentidos del Presidente de que no sabía nada del empleo en su campaña electoral de dineros procedentes de la droga, respondió Rubiano que cuándo hay un elefante en casa normalmente se cae en la cuenta. Por ello en innumerables caricaturas e incluso en demostraciones callejeras el elefante se convirtió así en símbolo de la «ignorancia» de Samper.

Sin embargo, esta nueva función política ha llevado a la Iglesia a un fuego cruzado. El Fiscal General realizó una investigación contra cuatro obispos, a los que calificó de «emisarios de la guerrilla». Los obispos eran de la opinión de que su misión pastoral les obligaba a intentar dialogar con todos aquellos que tomaban parte en el conflicto militar. El arzobispo de una gran ciudad de Colombia informa que, disgustado por su aparente simpatía hacia la guerrilla, el ejército le quiso negar el acceso a un cuartel para la confirmación de unos soldados. A finales de noviembre de 1997 el obispo José de Jesús Quintero Díaz, de la prelatura personal Tibu en el nordeste del país, fue secuestrado por la guerrilla ELN bajo la acusación de que era muy poco activo contra los grupos paramilitares que aterrorizaban a la población civil. Después de varias y enérgicas intervenciones internacionales, el obispo fue puesto de nuevo en libertad.

Debemos mencionar un seminario para obispos y sus colaboradores, organizado en octubre de 1994 por el obispo de Sincelejo, Beltrán Santamaría, para fomentar la aportación de la Iglesia a la superación pacífica del conflicto. Los participantes en el seminario votaron una declaración en la que ante todo reclamaban respeto a los derechos humanos como presupuesto para una solución pacífica del conflicto. Se conmina a las instituciones estatales a que tomen medidas «para construir un sistema judicial que funcione correctamente; que fomenten la democracia participativa presente en nuestra Constitución y que creen condiciones socioeconómicas basadas en la justicia social y en la solidaridad humana»⁸.

(8) «Der Bürger als Friedenstifte Erklärung von Sincelejo» en *Weltkirche* (1/1995),